



QUEJOSOS:

***** **

POR PROPIO DERECHO Y EN NOMBRE
DE *****

RECURRENTES:

1. JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA DECIMOSEGUNDA REGIÓN MILITAR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
2. RESPONSABLE DEL OCTAVO REGIMIENTO BLINDADO DE RECONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL.
3. DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO.

PONENTE: MAGISTRADO RELATOR
FRANCISCO JAVIER ARAUJO AGUILAR.

SECRETARIA:
ESTHER ROMERO GARCÍA.
*rmch

Guanajuato, Guanajuato. Resolución del Primer
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto
Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria por

videoconferencia de **veintidós de noviembre de dos mil veinticuatro**.

VISTO, para resolver, el amparo en revisión 35/2024 derivado del amparo indirecto ***** del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato.

R E S U L T A N D O :

PRIMERO. Demanda. Mediante llamada recibida en el teléfono de guardia del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, realizada a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos del dieciocho de marzo de dos mil diecisiete, ***** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal¹, a favor de ***** en contra de las autoridades y por los actos siguientes:

[...] En Irapuato, Guanajuato, a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos del dieciocho de marzo de dos mil diecisiete, el suscrito Víctor Castillo Gómez, secretario de guardia del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, recibí una llamada telefónica

¹ Foja 1 del juicio de amparo.



La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Admisión y trámite. De dicha demanda correspondió conocer, por razón de turno, al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, quien mediante acuerdo de

Seguido el juicio por sus trámites legales, el treinta y uno de julio de dos mil dieciocho⁴, la Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, celebró audiencia constitucional y dictó sentencia, terminada de engrosar el treinta y uno de octubre siguiente⁵ en la que se resolvió **sobreseer** en el juicio de amparo, en relación a los actos atribuidos al agente del Ministerio Público de la Federación, fiscal en jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas,

⁵ Fojas 1369 a 1461 Tomo 3 del juicio de amparo



Inconformes con esa determinación, las autoridades responsables y otras vinculadas al cumplimiento, interpusieron el recurso de revisión; cuyo conocimiento correspondió a este tribunal colegiado, quien el dos de octubre de dos mil diecinueve, resolvió el recurso de revisión ⁶, en el sentido de reservar la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado del control ex officio realizado por la jueza de distrito del artículo 15 de la Ley de Amparo.

⁶ Fojas 2369 a 2377, Tomo 3 del juicio de amparo

Christian Gabriel Aguilar Romero
706a6620636a66320000000000000000007bfff
15/05/26 18:00:00

Por lo anterior, este tribunal, el cinco de noviembre de dos mil veintiuno⁸, dictó una nueva resolución, en la que **revocó** la sentencia recurrida y **ordenó reponer el procedimiento**, en los términos siguientes:

Bajo las anteriores consideraciones, de conformidad con la fracción IV, del artículo 93 de la Ley de Amparo, lo conducente es **revocar la sentencia recurrida**, a fin de reponer el procedimiento, para el efecto de que la juez de distrito participe formal y materialmente a las autoridades responsables acerca de los indicios relacionados con los hechos posiblemente constitutivos de la violación grave a derechos humanos consistente en la desaparición forzada de *****

En el entendido de que la autoridad de amparo tendrá especial cuidado en los criterios de admisibilidad y desahogo de las pruebas que se propongan para sustentar una explicación razonable del acontecimiento,

⁸ Fojas 2404 a 2485, Tomo 4 del juicio de amparo



*De igual manera, cabe hacer la precisión de que los indicios recabados podrán ser valorados de frente a las razones que dicha autoridad exponga, empero, tomando como base un **estándar atenuado** de comprobación respecto de la violación, en razón de que una de las características de la desaparición forzada es precisamente la negativa del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control y de proporcionar información al respecto con el propósito de generar incertidumbre acerca de su paradero, vida o muerte⁹.*

Sumado a que, conforme a los criterios nacionales comentados será innecesario contar con prueba que demuestre inequívocamente la participación de las autoridades, o bien, prueba cierta, indudable e indispensable acerca de la presencia de la corporación militar en el lugar de la desaparición, pues **bastarán los indicios** que permitan sostener razonablemente de la desaparición, **aun cuando no se sepa la identidad del o los perpetradores.**

Esto es, de acuerdo con las razones vertidas en los precedentes nacionales analizados, el estándar probatorio de la violación al derecho fundamental que se reclame es más bajo que el requerido para su comprobación, por ejemplo, en su vertiente delictiva¹⁰; pues lo que se persigue con ello no es pasar al fincamiento de una condena penal, sino arribar a una pauta razonable de probabilidad para que opere la regla de reversión de la carga de la prueba hacia la autoridad y luego, para dilucidar si se demuestra como violación a derechos fundamentales.

⁹ Corte IDH. Caso Gutiérrez Hernández y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2017. Serie C No. 339, párr. 192.

10 Véase, la sentencia del Amparo en Revisión 256/2015, párr. 59: “[...] Asimismo, es necesario recordar que se debe tomar en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores.”; así como la dictada en el Amparo Directo en Revisión 4578/2014, párr. 151 y 152: “[...] si esa noticia surge dentro de algún proceso penal seguido contra quien alega haber sido víctima de tortura, el juez de la causa debe verificar la veracidad de la misma para determinar su impacto procesal, requiriéndose en ese caso, para tener por demostrada la tortura como violación a la integridad personal, con repercusión al derecho humano de debido proceso, un estándar más bajo que el exigido para la configuración del delito de tortura, pues bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. — 152. Ello es acorde a un paradigma pro derechos humanos, pues a través de dicho estándar bajo se logra desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción en perjuicio de los justiciables, de tal suerte que como se apuntó en los apartados precedentes, competirá a los agentes estatales encargados de la acusación demostrar que las declaraciones de los imputados fueron libres y espontáneas”.

Para finalizar, es pertinente agregar que la confirmación o refutación definitiva respecto a la existencia de esa violación a derechos fundamentales —con base necesariamente en indicios que así la sustenten con un

¹² Amparo en revisión 1077/2019, resuelto en sesión de 16 de junio de 2021, por unanimidad de cinco votos, bajo la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.



Así, una vez que la juez federal dé cumplimiento al lineamiento precisado en párrafos previos, deberá continuar con el trámite del juicio de amparo y, en su oportunidad, pronunciar una nueva sentencia, para lo cual queda con plenitud de jurisdicción.

TERCERO. Audiencia constitucional y sentencia. Seguido el juicio por sus trámites legales, el trece de octubre de dos mil veintidós¹³, la Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, celebró audiencia constitucional y la titular del **Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas**, en el expediente auxiliar *********, dictó sentencia, terminada de engrosar el treinta de octubre de dos mil veintitrés¹⁴ en la que se resolvió, lo siguiente:

PRIMERO. Se **SOBRESEE** en el juicio de amparo promovido por ***** y ***** ** ** *, en contra de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando **quinto**, por los motivos expuestos en el **mismo** considerando.

¹³ Foja 2688 Tomo 4 del juicio de amparo.

¹⁴ Fojas 2704 a 2873 Tomo 4 del juicio de amparo

CUARTO. Interposición del recurso de
Inconformes con esa determinación, las
es responsables **1.** Jefe de Estado Mayor de la
gunda Región Militar de la Secretaría de la
Nacional; **2.** Responsable del Octavo Regimiento
de Reconocimiento de la Secretaría de la Defensa
y **3.** Directora General de Asuntos Jurídicos de la
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de
interpusieron recurso de revisión que, por autos de
y veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés¹⁵,
por interpuesto y se ordenó remitir el expediente,
que estuviera integrado, al Tribunal Colegiado en
enal del Decimosexto Circuito en turno, para su
ción.

¹⁵ Fojas 2952 y 2966 del cuaderno de amparo.

pedimento en el sentido de que se niegue el amparo solicitado.

SEXTO. Turno. En auto de veintisiete de febrero de dos mil veinticuatro¹⁸, de conformidad con el artículo 92¹⁹ de la Ley de Amparo y la fracción II del artículo 28²⁰ de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turnó el asunto al magistrado Francisco Javier Araujo Aguilar para la formulación del proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito resulta competente para resolver la revisión, conforme a la fracción VIII del artículo 107²¹ de la Constitución Política de

¹⁸ foja 95 de este tomo.

¹⁹ **Artículo 92.** Notificadas las partes del auto de admisión, transcurrido el plazo para adherirse a la revisión y, en su caso, tramitada ésta, se turnará de inmediato el expediente al ministro o magistrado que corresponda. La resolución deberá dictarse dentro del plazo máximo de noventa días.

²⁰ **Artículo 28.** Son atribuciones de las y los presidentes de los tribunales colegiados y de los plenos regionales:

[...]

II. Turnar los asuntos entre las y los magistrados que integren el tribunal o pleno;

...

²¹ **Artículo 107.** Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[...]

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:

[...]



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 84²² de la Ley de Amparo, a la fracción II del artículo 38²³ y al artículo 39²⁴, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como a los Acuerdos Generales 3/2013 y 50/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la sentencia recurrida fue emitida en un amparo indirecto del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, lugar donde ejerce jurisdicción este órgano colegiado.

SEGUNDO. Jurisprudencia. La aplicación de la jurisprudencia que se citará, emitida con anterioridad al tres de abril de dos mil trece, tiene como fundamento el artículo sexto transitorio²⁵ de la Ley de Amparo vigente a partir de

En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno.

²² **Artículo 84.** Son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno.

²³ **Artículo 38.** Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer:

$$[\dots]$$

II. Del recurso de revisión en los casos a que se refiere el artículo 81 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

[...]

²⁴ **Artículo 39.** Podrán establecerse tribunales colegiados de circuito especializados, los cuales conocerán de los asuntos que establece el artículo anterior en la materia de su especialidad.

25 [...]

SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley.

[...]

esa fecha, habida cuenta que no se opone a la legislación en consulta.

TERCERO. Procedencia. Resulta procedente el recurso interpuesto, debido a que se hizo valer en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, es decir, contra la sentencia de treinta de octubre de dos mil veintitrés, que resolvió el juicio de amparo indirecto

CUARTO. Oportunidad. La sentencia recurrida fue notificada por oficio el sábado nueve de noviembre de dos mil veinticuatro²⁶, surtió sus efectos el mismo día, por lo tanto el plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del **diez al veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés**, sin contar los días once, doce, dieciocho, diecinueve y veinte del citado mes y año, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la ley de la materia y la circular 12/2023.

²⁶ Foja 95 del Juicio de Amparo.



Bajo ese panorama se considera que el medio de impugnación se interpuso de forma oportuna ya que los escritos de agravios del **1.** Jefe de Estado Mayor de la Decimosegunda Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; **2.** Responsable del Octavo Regimiento Blindado de Reconocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional; y **3.** Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de México; se presentaron el veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.

Lo anterior se plasma en el siguiente gráfico:

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2023						
DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO
	30 Emite la sentencia recurrida					
				9 SE NOTIFI CÓ POR OFICIO, POR LO QUE SURTÍÓ EFFECT OS EL MISMO DÍA	10 Día 1 Inicia el plazo	11
12	13 Día 2	14 Día 3	15 Día 4	16 Día 5	17 Día 6	18
19	20 Día inhábil	21 Día 7	22 Día 8	23 Día 9	24 Día 10 Fenece el plazo Interponen el	

					recurso	
--	--	--	--	--	---------	--

(Véase fojas 3, 29 y 55 del amparo en revisión).

QUINTO. Legitimación. *****

***** , ***** y *****

***** , están legitimados para interponer el presente recurso, pues tienen el carácter de **1.** Jefe de Estado Mayor de la Decimosegunda Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; **2.** Responsable del Octavo Regimiento Blindado de Reconocimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional; y **3.** Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de México, todas autoridades responsables en el juicio de amparo de origen, en términos de la fracción II del artículo 5²⁷ de la Ley de Amparo.

SEXTO. No transcripción de constancias. La

Ley de Amparo no establece como una condición necesaria, para cumplir con los principios de congruencia y

²⁷ **Artículo 5o.** Son partes en el juicio de amparo:
[...]
II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
...



exhaustividad, la reproducción integral de la sentencia recurrida ni de los agravios formulados en su contra. En su lugar, sólo se transcriben aquellos elementos relevantes para el caso en cuestión, esto significa que no es forzoso incluir todos los detalles, sino únicamente los que tengan importancia para el asunto en proceso.

SÉPTIMO. No existe suplencia de la queja.

Debido a que el medio de impugnación lo interpusieron las autoridades responsables de mérito, quienes se advierte de constancias no tienen el carácter de inculcados o sentenciados, ni de ofendidos o víctimas, a que se alude en el artículo 79, fracción III, incisos a) y b), de la Ley de Amparo²⁸, el análisis de legalidad de la determinación

²⁸ **Artículo 79.** La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

1. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los plenos regionales. La jurisprudencia de los plenos regionales sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales de la región correspondientes:

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia:

III. En materia penal:

a) En favor del inculpadado o sentenciado; y

b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente:

IV. En materia agraria:

a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley: y

b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios.

En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios:

V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo;

recurrida se efectuará a la luz de los argumentos externados en los respectivos escritos de agravios, sin que en el caso, opere la suplencia de la queja.

OCTAVO. Elementos necesarios para resolver.

I. Consideraciones de la sentencia recurrida.

En la sentencia recurrida de treinta de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo indirecto *********, del índice del Juzgado Noveno del Distrito en el Estado de Guanajuato, por una parte, se **sobreseyó en el juicio** y, por otra, se concedió **la protección de la Justicia Federal** solicitada.

Se **sobreseyó en el juicio** de conformidad con el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al considerar

VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.

En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio.

La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo.

Estado Mayor de la Decimosegunda Región Militar y mayor responsable del Octavo Regimiento Militar Blindado de Reconocimiento, relativas a la improcedencia del juicio de amparo.

En sustento de su argumento, invocó la tesis de rubro:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.”

Además, la jueza recurrida consideró **inatendibles** las manifestaciones referentes a que la jueza federal actuó con imparcialidad (sic), por dedicarse a recabar pruebas de las autoridades ministeriales, tanto federales como locales, tomar comparecencias, realizar inspecciones judiciales sin que ninguna de las partes lo hubiera gestionado.

Lo anterior, al estimar, que dichas diligencias se realizaron en cumplimiento a lo ordenado por este tribunal en la ejecutoria de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, donde se ordenó reponer el procedimiento en el juicio de

de Distr
erechos a
y de **acce**
desapari
mo son el
a respons
cción de
perdió la
on, precis
onalidad,
sentenci
s manifes
or la quej
lefónica,
nde esenc

erechos a
y de **acce**
desapari
mo son el
a respons
cción de
perdió la
on, precis
onalidad,
sentenci
s manifes
or la quej

nde esenc

sociedad anónima de capital variable informó se había utilizado el teléfono del quejoso occiso, posterior al diecinueve de marzo de dos mil diecisiete; se ordenó la búsqueda de ***** , nombre al que se encuentra la línea telefónica del quejoso occiso, sin resultado favorable, quien tanto ***** como ***** coincidieron en no saber quién es; se buscó al quejoso occiso en las agencias del Ministerio Público de Guanajuato capital, León y Celaya, Guanajuato, sin encontrarlo, así como en los separos de dichas ciudades; se solicitó informe del paradero del multirreferido quejoso, a las Procuradurías Generales de Justicia de Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Michoacán, sin que se lograra su localización; el coordinador Estatal del Servicio Médico Forense, informó que el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, se localizó un cuerpo del sexo masculino de aproximadamente veinte años de edad, que tiene relación con la carpeta de investigación ***** de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios en Irapuato, identificado por ***** como el de quien en vida respondiera al nombre de *****



***** ; la compañía ***** ,
sociedad anónima de capital variable informó las
coordenadas donde se utilizó el teléfono del quejoso
occiso, los días del veintiuno al veintitrés, de marzo de dos
mil diecisiete, lugares en los que se realizaron las
correspondientes inspecciones judiciales, sin encontrar al
quejoso occiso; fue remitida al Juzgado de Amparo la
carpeta de investigación ***** , de la Agencia del
Ministerio Público VIII, con sede en Irapuato, iniciada por la
no localización de ***** ; no se
encontraron registros de antecedentes penales a nombre
del quejoso occiso.

Asimismo, se estableció que los medios probatorios que fueron recabados en la tramitación del juicio de amparo son los siguientes:

“1. Copia autenticada de la carpeta de investigación
***** de la Agencia del Ministerio Público VIII del
Sistema de Tramitación Común de Irapuato²⁹, por la no
localización de **** ***** ***** *****
2. Copia autenticada de la carpeta de investigación
***** de la Unidad Especializada en Investigación
de Homicidios de Irapuato³⁰, iniciada con motivo de la
localización del cuerpo sin vida de *****
***** *****

²⁹ Folio 484 del Tomo I del expediente de amparo y Tomo I de pruebas.

³⁰ Folios 539 y 635 a 640 del Tomo I del expediente de amparo y Tomo II de pruebas.



identificado como **** *,
realizada por la perito médico legista de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Guanajuato, **
**** *

10. Copia certificada de mensajes de la Secretaría de la Defensa Nacional de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, aportada por el Mayor A.B. Jefe de la S.P.A.A. del 8º Rgto. Blnd. Rec.³⁹, en que consta el informe de reconocimientos en las colonias **
***** ** ***** ** ***** *** *****
***** ** ***** ***** y *** ***** , con
resultados negativos; las actividades derivadas de la
“*****” de la Base de Operaciones ***** y,
las instrucciones para que no se molestara a la quejosa
y a su familia.

11. Partes informativos de los días dieciséis y diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, remitidos por el 2º Comandante y J.G.C. del 6º Regimiento Mecanizado⁴⁰, sobre las actividades de la Base de Operaciones Pirul 3 de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.

12. Notas preliminares de diecisiete y diecinueve de marzo de dos mil diecisiete, suscritas por el Jefe de Departamento de la Zona Salamanca de Pemex, remitidas por el encargado del despacho de la Jefatura de Zona⁴¹, sobre incidencias ocurridas el diecisiete y diecinueve de marzo de dos mil diecisiete.

13. Informes sobre la suspensión de plano y justificados del Oficial de Servicio de Estado Mayor de la XII Región Militar⁴², del Jefe del Estado Mayor de la XII Región Militar⁴³, del Mayor A.B. Jefe de la S.P.A.A. del 8º Rgto. Blnd. Rec.⁴⁴ y del Comandante Interino del 6º Regimiento Mecanizado⁴⁵, sobre la realización de operativos en las comunidades ***** , ** ** ***** y ** ***** , la existencia de personal militar en la zona y la detención del quejoso, en los cuales se niegan los actos reclamados.

14. Diligencia practicada el siete de julio de dos mil diecisiete por la Secretaria y Actuario adscritos al órgano jurisdiccional auxiliado en la negociación denominada “*****” de la comunidad ** ***** , municipio de Irapuato, Guanajuato⁴⁶, a la cual llegó ***** *****

³⁸ Folio 926 del Tomo II del expediente de amparo.

³⁹ Folios 547 a 549 del Tomo I del expediente de amparo.

⁴⁰ Folios 1191 a 1198 del Tomo II del expediente de amparo.

⁴¹ Folios 1180 a 1183 del Tomo II del expediente de amparo.

⁴² Folio 177 del Tomo I del expediente de amparo.

⁴³ Folio 212 del Tomo I del expediente de amparo.

⁴⁴ Folios 116, 545 y 546 del Tomo I del expediente de amparo.

⁴⁵ Folio 1207 del Tomo II del expediente de amparo.

⁴⁶ Folios 821 a 823 del Tomo II del expediente de amparo.



21. Dispositivo de almacenamiento que contiene copia de la georeferenciación y video desplazamiento de las antenas que captaron la señal de líneas telefónicas, proporcionadas por la Agente del Ministerio Público de la Federación en Funciones de Titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad Especializada "A", Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada⁵⁶.

Para luego, la jueza de Amparo, en el apartado que denominó *“Inicio de la investigación por la desaparición del quejoso”*, relacionar las carpetas de investigación iniciadas con motivo de la desaparición del quejoso occiso

A continuación, en lo que el **considerando séptimo**, apartado denominado “***Protección de testigos***”, se precisó que personal del juzgado de amparo tomó la declaración de dos testigos, respecto de los que, se precisó y justificó, la necesidad de resguardar su identidad, donde uno de ellos manifestó lo siguiente:

... el domingo siguiente se quemó un tanque de gasolina y los “sardos” andaban en la orilla de su milpa, porque por ahí pasa una toma, y que algunas veces se meten a su casa y le dicen que andan persiguiendo a la delincuencia y le preguntan si no sabe ahí quién vende gasolina y se sientan a almorzar ahí afuera de su casa.

⁵⁵ Folios 1297 a 1299 y 1303 del Tomo II del expediente de amparo.

⁵⁶ Folio 1330 del Tomo III del expediente de amparo.

***** , por el delito de abuso de
autoridad, con motivo de la queja formulada por la quejosa
***** , atribuibles a personal
militar. Pero, precisó, que valoraría la citada carpeta
únicamente en lo referente a la forma de proceder de las
autoridades militares, con posterioridad a la desaparición
del quejoso.

Asimismo, estableció que en el caso no iba a seguirse las reglas y cargas probatorias ordinarias del juicio de amparo, conforme a las cuales la negativa de las autoridades responsables sobre el acto reclamado revierte la carga probatoria a la parte quejosa; porque al tratarse de desaparición forzada, corresponde al Estado proporcionar una explicación satisfactoria y convincente sobre los



hechos. De ahí, que para verificar la desaparición forzada reclamada en juicio de amparo, precisó, debe atenderse a los indicios y a las presunciones, de manera que si se demuestra que la detención del quejoso fue realizada por agentes del Estado y posteriormente no se tiene noticia de su paradero, sin que la autoridad responsable dé una explicación satisfactoria y congruente de los hechos, es dable estimar demostrada la desaparición forzada del quejoso a cargo de la autoridad.

Por otra parte, en la sentencia recurrida se precisó que se concede **la protección de la Justicia Federal** solicitada, al estimar que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 13, 14, 16, 17, 21 y 22 constitucionales, 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1, 2, 3, 5, 6, 12; 19 y 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 13 y

16 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, así como I, II, VIII y X de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Asimismo, se estableció que de autos se encuentran demostrados los hechos siguientes:

... que elementos del Ejército detuvieron a ****
***** el diecisiete de marzo de
dos mil diecisiete, entre las diecinueve y veinte horas, en
el camino de terracería que va de ***** El
***** a ** ***** , comunidades pertenecientes al
municipio de Irapuato, Guanajuato, a la altura de las
lavadoras de ***** , del lugar denominado “La
*****” y de la alberca o depósito de agua, cerca
del *** *****.

Lo anterior, al tomar en cuenta lo siguiente:

- Las múltiples declaraciones rendidas por
***** (ante el juzgado
de Distrito de origen, en las carpetas de
investigación ***** y ***** ,
así como en la queja ***** de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos).
- Los lugares identificados por el citado
*****.
- Los sitios relevantes de los hechos
referidos de las actas de descripción de
lugar de veinte y veintiuno de marzo de dos

occiso), a partir del diecisiete de marzo de dos mil diecisiete.

- Mapa donde se localiza el lugar que arrojó la sábana de llamadas del número telefónico *****.
- Lo manifestado por ***** , en las carpetas de investigación ***** y ***** , y la diligencia de siete de julio de dos mil diecisiete, practicada por la jueza de Amparo.
- El dicho de ***** que obra en la carpeta de investigación *****.
- Las entrevistas de ***** o ***** o ***** , que obran en las carpetas de investigación ***** y ***** , y en la diligencia de inspección de veinticuatro de junio de dos mil diecisiete, practicada por el Juzgado de Distrito.
- El mensaje *** ***** , de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, del Cap. 2/o. Intdte. Cmte. Sec. de Intdcia. ***** y del oficio ***** , de ocho de mayo de dos mil diecisiete, del Coronel del A.B. Cmete del Rgto. ***** , que obran en la carpeta de investigación *****.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

- Mapas donde se ubican las bases de operaciones del Ejército y el lugar donde se estableció fue detenido el occiso.
- Los oficios ***** , de cinco de mayo de dos mil diecisiete, del Sgto. 2/o. Carp., Asesor Jurídico XII R.M., *****
***** , ***** , de veinticinco de abril de dos mil diecisiete, del Gral. Brig. D.E.N. Jefe del Edo. Myr. *****
***** de la 16/a. Zona Militar, y radiograma suscrito por el Cor. *****
***** , que obran en la carpeta de investigación ***** , así como con el oficio ***** , de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, del Subjefe Edo. Myr. de la XII Región Militar, Coronel de Infantería D.E.M. ***** , que obra en la carpeta de investigación ***** .
- Mapas donde se ubican las comunidades por las cuales realizaron patrullaje los elementos del Ejército, respecto del lugar donde se estableció fue detenido el occiso.
- Entrevistas rendidas por *****
**** , ***** ,
***** , *****
***** , *****
y ***** , existentes en la carpeta de investigación ***** de la

Christian Gabriel Aguilar Romero
7066620636e65200000000000000000076f
15/05/26 18:00:00

Christian Gabriel Aguilar Romero
706a6620636a66320000000000000000007bf
15/05/26 18:00:00

...ana los e



donde es
bases d
cluyó que
orzada.
el con
al Regis
cidas, al Í
me sobr
emitido p
anos el t
s evento
acuerdo a
en el caso

donde es
bases d
cluyó que
orzada.
el con
al Regis
cidas, al Í
me sobr
emitido p
anos el t
s evento
acuerdo a
en el caso

donde es
bases d
cluyó que
orzada.
el con
al Regis
cidas, al Í
me sobr
emitido p
anos el t
s evento
acuerdo a
en el caso

donde es
bases d
cluyó que
orzada.
el con
al Regis
cidas, al Í
me sobr
emitido p
anos el t
s evento
acuerdo a
en el caso

donde es
bases d
cluyó que
orzada.
el con
al Regis
cidas, al Í
me sobr
emitido p
anos el t
s evento
acuerdo a
en el caso



sal de
araron
valer y s
nalizar la
penal, e
erechos
didas de
informaci
na en el
ón forzad
que ha co
anos, pa
ede el amp
se impone
satisfacció

sal de
araron
valer y s
nalizar la
penal, e
erechos
didas de
informaci
na en el
ón forzad
que ha co
anos, pa
ede el amp
se impone
satisfacció

sal de
araron
valer y s
nalizar la
penal, e
erechos
didas de
informaci
na en el
ón forzad
que ha co
anos, pa
ede el amp
se impone
satisfacció

sal de
araron
valer y s
nalizar la
penal, e
erechos
didas de
informaci
na en el
ón forzad
que ha co
anos, pa
ede el amp
se impone
satisfacció

sal de
araron f
valer y s
nalizar la
penal, e
erechos
didas de
informaci
na en el
ón forzad
que ha co
anos, pa
ede el amp
se impone
satisfacció

sal de
araron
valer y s
nalizar la
penal, e
erechos
didas de
informaci
na en el
ón forzad
que ha co
anos, pa
ede el amp
se impone
satisfacció

sal de
araron
valer y s
nalizar la
penal, e
erechos
didas de
informaci
na en el
ón forzad
que ha co
anos, pa
ede el amp
se impone
satisfacció



Además, deberá llevar a cabo una investigación de contexto en los términos que han quedado precisados en el propio considerando.

***** , en la cual, conforme a las consideraciones de la presente resolución, intervinieron elementos del Ejército Mexicano, quienes el diecisiete de marzo de dos mil diecisiete lo detuvieron.

Es decir, el agente del Ministerio Público debe mantener en curso la investigación hasta que formule imputación a todos los responsables de la desaparición del quejoso.

Por tanto, dicha autoridad debe comunicar al juzgado auxiliado en el improrrogable plazo de **cuarenta días hábiles** la determinación a la cual arribó; asimismo, debe remitir las constancias respectivas.

Comuníquese la presente determinación al **Encargado del Despacho de la Procuraduría General de la República y al Titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República**, para su conocimiento y efectos legales conducentes; en virtud de ser los superiores jerárquicos del fiscal investigador.

Por otra parte, requiérase a la Fiscalía Militar, en términos de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, para que se abstenga de investigar los hechos constitutivos del acto reclamado, por estar involucrado un civil.

3) Medida de satisfacción. Divulgación de la sentencia.

Las autoridades responsables XII Zona Militar y 8/o. Regimiento Blindado de Reconocimiento, **deben publicar por una sola ocasión, un extracto de la presente resolución en un diario de circulación nacional**, pues dada la violación a múltiples derechos humanos de los quejosos es relevante su divulgación, para no dejar en la opacidad la actuación ilegal de las autoridades responsables y hacer un reconocimiento simbólico de modo personal a los quejosos.

Para el cumplimiento de lo anterior, una vez que cause ejecutoria la sentencia, el juzgado auxiliado deberá requerir a la quejosa ***** ** ** ***** *****

En el entendido de que las autoridades y los familiares del quejoso deberán acordar la modalidad de cumplimiento del acto público de reconocimiento, así como el lugar y fecha de su realización, los cuales



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

deberán ser informados al órgano jurisdiccional auxiliado con al menos cinco días hábiles de anticipación.

5) Medida de satisfacción.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a través del *Comité de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas*, debe inscribir a los quejosos

***** y *****

***** en el Registro Nacional de Víctimas.

Además, de conformidad con el artículo 62, fracción I y II, de la Ley General de Víctimas, las víctimas tienen derecho a recibir atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas, así como servicios y asesoría jurídicos. Por lo cual, en caso de que así lo solicite ***** ** ** ** *, deberán recibirla.

6) Medida de satisfacción.

A través del órgano competente, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe iniciar un procedimiento a fin de que se pague una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo, a favor de ****

por conducto de su madre

***** ** ** * ***** *****
o de cualquier persona

que acredite su representación; además, debe iniciar un
procedimiento para que se pague la compensación a
***** ** ** *

En la inteligencia de que el caso concreto es **desaparición forzada**, por lo cual las resoluciones que se dicten deben ser proporcionales a la gravedad del daño sufrido.

Si bien el artículo 147 de la Ley General de Víctimas dispone que a la solicitud de ayuda o apoyo debe agregarse un estudio de trabajo social, dictamen médico y dictamen psicológico, no debe perderse de vista que **** * perdió la vida, por ello,

resulta materialmente imposible que esos estudios y dictámenes se practiquen a la víctima; es decir, el procedimiento que se instruya a fin de realizar el pago con recurso del fondo respectivo, deberá ser accesible para los quejosos.

7) Medida de no repetición.

Todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben respetar el derecho de las víctimas a no ser criminalizadas²¹ ni a sufrir victimización secundaria, conforme el artículo 5º de la Ley General de Víctimas.

La presente determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento, aun cuando no estuvieran señaladas como responsables en el presente juicio de amparo; ello en acatamiento a la jurisprudencia 236, cuyo rubro y

En sustento a sus argumentos, citó los criterios :

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.”

“FUERO MILITAR. EL ARTÍCULO 57, FRACCIÓN II, INCISO A), DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR CONTRAVIENE LA CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.”

“COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO.”

48



***EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O CON MOTIVO DE
ELLAS, QUE AFECTEN LOS DERECHOS HUMANOS
DE CIVILES. SE SURTE A FAVOR DE LOS JUECES
DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES
FEDERALES.***³⁷

“MEDIDAS DE REPARACIÓN INTEGRAL ANTE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS. POR REGLA GENERAL NO ES POSIBLE DECRETAR EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO MEDIDAS NO PECUNIARIAS DE SATISFACCIÓN O GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN PARA REPARAR AQUÉLLAS.”

“DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE ESTE DELITO SON VIOLACIONES GRAVES A LOS DERECHOS HUMANOS PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA.”

“DELITOS O CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE LOS INVESTIGA.”

**“DESAPARICIÓN FORZADA. CONSTITUYE UNA
“VIOLACIÓN GRAVE DE DERECHOS
FUNDAMENTALES” PARA EFECTOS DE LA
EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14,
PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA GUBERNAMENTAL, VIGENTE HASTA EL 9
DE MAYO DE 2016.”**

“EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO”.

II. Agravios. Inconformes con la sentencia de amparo, las autoridades responsables expresaron, en lo total, los argumentos siguientes:

Las recurrentes:

- I. JEFE DEL ESTADO MAYOR DE LA
DECIMOSEGUNDA REGIÓN MILITAR DE
LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA
NACIONAL; Y,**
- II. RESPONSABLE DEL OCTAVO
REGIMIENTO MILITAR BLINDADO DE
RECONOCIMIENTO DE LA SECRETARÍA
DE LA DEFENSA NACIONAL.**

Fueron coincidentes en expresar, en síntesis, los motivos de disenso, siguientes:

Uno. Que debe atenderse a que de las constancias existentes, tomadas en cuenta por la jueza recurrida, no se advierte que los recurrentes estuvieran en el lugar de los hechos, tampoco una acción u omisión en perjuicio del directo quejoso.

Dos. Que se tomó atribuciones que no le correspondían y que en todo caso eran propias del órgano ministerial de investigación de delito.

comparo en
seguir y q
edimiento
e procedin
os norma
cedimien
eral de
es para lle
ó.
gredió e
porque la
contraven
edimientos
de valor pr
so se del
squeda
General c
ondujeran
aradero,

comparo en
seguir y q
cedimiento
e procedim
os norma
cedimien
eral de
es para lle
ó.
gredió e
porque la
contraven
cedimientos
de valor pr
so se del
squeda
General c
condujeran
aradero,

comparo en
seguir y q
cedimiento
e procedim
os norma
cedimien
eral de
es para lle
ó.
gredió e
porque la
contraven
cedimientos
de valor pr
so se del
squeda
General c
condujeran
aradero,

comparo en
seguir y q
cedimiento
e procedim
os norma
cedimien
eral de
es para lle
ó.
gredió e
porque la
contraven
cedimientos
de valor pr
so se del
squeda
General c
condujeran
aradero,



mil diecisiete, en la comunidad **** *******, en la que se sostiene la presencia de vehículos tipo Jeep, porque en esos lugares el Ejército Mexicano únicamente utiliza vehículos tipo Humvee o Cheyenne.

Catorce. Que indebidamente se sostuvo que las diversas declaraciones que tomó el Ejército, contravienen los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, así como lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el *Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. México*, porque no se estableció el motivo de dichas diligencias.

Quince. Que al no existir una sentencia penal condenatoria firme, en contra de un elemento del Ejército Mexicano, no procedía imponer medidas reparatorias de satisfacción y de garantías.

En sustento a sus argumentos, las recurrentes citaron los criterios siguientes:

“DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. AL IDENTIFICARLA COMO ACTO RECLAMADO EN EL



AMPARO, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL, OFICIOSAMENTE, DEBE ORDENAR A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES QUE PRACTIQUEN LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES PARA LOGRAR LA LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DEL AGRAVIADO, ASÍ COMO REQUERIRLES TODA LA INFORMACIÓN PARA ELLO”.⁵⁷

“ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL CORRESPONDE AL QUEJOSO”.⁵⁸

“PRUEBAS EN EL AMPARO INDIRECTO, ADMISION DE LAS”.⁵⁹

“PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES”.⁶⁰

“PRUEBA ILÍCITA. VALORACIÓN DEL PRINCIPIO DE SU PROHIBICIÓN O EXCLUSIÓN DEL PROCESO, BAJO LA ÓPTICA DE LA TEORÍA DEL VÍNCULO O NEXO CAUSAL ATENUADO EN LA DECLARACIÓN DEL INCUPLADO”.⁶¹

DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO.⁶²

57 Registro digital: 2001633, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, Tesis aislada VIII.2o.P.A.2 P (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3, página 1726

⁵⁸ Registro digital: 210769, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Jurisprudencia VI.2o. J/308, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994, página 77.

⁵⁹ Registro digital: 220266, Tercer Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, Tesis aislada VI.3o.73 K. Semanario Judicial de la Federación. Torno IX. Marzo de 1992, página 275.

⁶⁰ Registro digital: 160509, Primera Sala, Jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011. Tomo 3, página 2057.

⁶¹ Registro digital: 2005726, Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Jurisprudencial.9o.P. J/12 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2065.

⁶² Registro digital: 2005716, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3. Febrero de 2014. Tomo I. página 396.

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA”.⁶³

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO SE CONSTITUYE EN EL DERECHO DEL ACUSADO A NO SUFRIR UNA CONDENA A MENOS QUE SU RESPONSABILIDAD PENAL HAYA QUEDADO DEMOSTRADA PLENAMENTE, A TRAVÉS DE UNA ACTIVIDAD PROBATORIA DE CARGO, OBTENIDA DE MANERA LÍCITA, CONFORME A LAS CORRESPONDIENTES REGLAS PROCESALES”.⁶⁴

“ACREDITACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO Y DEL DELITO EN SÍ. SUS DIFERENCIAS”.⁶⁵

En tanto, la recurrente:

**III. DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS
JURÍDICOS DE LA COMISIÓN
EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DEL GOBIERNO DE MÉXICO**

Hizo valer como concepto de agravio,
esencialmente, lo siguiente:

Único. Que indebidamente se le vincula
directamente al pago de la compensación subsidiaria,

⁶³ Registro digital: 2006091, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 1a./J. 26/2014 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 476.

⁶⁴ Registro digital: 173507, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Tesis Aislada I.4o.P.36 P, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, página 2295.

⁶⁵ Registro digital: 160621, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jurisprudencia 1a./J. 143/2011 (9a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 2, página 912.



porque se pierde de vista que, de acuerdo a los artículos 1 y 20 constitucionales, 2, 6, 26, 64 a 72 de la Ley General de Víctimas, para el caso de violaciones a derechos humanos la que corresponde aplicar es la reparación integral del daño; aunado a que el presupuesto necesario para solicitar la compensación subsidiaria por la comisión de un delito, es la imposibilidad fáctica del responsable directo de reparar el daño -en el caso el Ejército Mexicano- y el cumplimiento de los requisitos previstos para tal efecto en la citada ley.

NOVENO. No es materia de este recurso.

En el considerando quinto del fallo recurrido, la jueza de Distrito determinó sobreseer en el juicio respecto de las autoridades siguientes:

- Agente del Ministerio Público de la Federación
- Fiscal en jefe de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas con residencia en la Ciudad de México
- Agentes del Ministerio Público de la Federación, titulares de las Agencias Primera, Segunda, Tercera y Cuarta de Investigación y Litigación de Irapuato
- Titular de la Agencia Segunda Investigadora del Sistema Tradicional de Irapuato

- Christian Gabriel Aguilar Romero
706a6620636a66320000000000000000007bf
15/05/26 18:00:00

que no tiene
porque
de eje
no es
or lo qu
sente rec
uejosa, q
rudencia
uprema C
se en la p
Judicial de

que no tiene
porque
de eje
no es
or lo qu
sente rec
uejosa, q
rudencia
uprema C
se en la p
Judicial de

que no tiene
porque
de eje
no es
or lo qu
sente rec
uejosa, q
rudencia
uprema C
se en la p
Judicial de

que no tiene
porque
de eje
no es
or lo qu
sente rec
uejosa, q
rudencia
uprema C
se en la p
Judicial de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Por cuestión de método, en primer término se analizan los conceptos de agravio hechos valer por las autoridades militares recurrentes.

Dichos agravios resultan en una parte **infundados** y en otra **inoperantes**, por las razones que a continuación se indican. Los que, cabe precisar, se analizan en orden diverso al propuesto.

I. Causas de improcedencia.

En el **agravio diez** las recurrentes sostienen que es incorrecto reconocer el carácter de quejosa y víctima indirecta a ***** , ya que no acreditó el parentesco que dijo tener con el quejoso, con la correspondiente acta de nacimiento. Motivo de disenso que de ser fundado, implicaría la actualización de una causa de improcedencia, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la Ley de Amparo.

Cabe precisar que al respecto en la sentencia recurrida se estableció lo siguiente:

a ***** ** ** ** ***** *****

Ahora bien, este tribunal colegiado considera que no le asiste razón jurídica a la parte inconforme, por los siguientes motivos:

Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Por ende, todos los Estados deben tomar todas las medidas apropiadas para salvaguardar ese derecho.

60



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

inmediato con motivo de la desaparición forzada de otra persona.

Con respecto a la legitimación de las víctimas de la desaparición forzada para acudir al amparo, cabe relatar lo siguiente:

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, en su Informe de Misión a México en 2011, urgió al Estado Mexicano a adoptar una nueva ley en materia de amparo (que) respondiera adecuadamente a la peculiaridad de la desaparición forzada de personas, **albergara una concepción amplia de víctima**, sin establecer exigencias gravosas sobre las circunstancias bajo análisis, como la ratificación de la demanda de amparo por la víctima directa.

Asimismo, señaló que una característica adicional de dicho mecanismo debía consistir en hacer asequible a toda víctima de un acto de desaparición forzada y sus familiares, **el derecho a una reparación integral** que incluyera indemnización, satisfacción, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición, según lo previsto por el artículo 19 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Ahora bien, el artículo 15 de la Ley de Amparo, establece que cuando el acto reclamado en la demanda se trate de desaparición forzada de personas —entre otros— y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.

En ese sentido, es claro que dicho numeral encuentra plena congruencia con las disposiciones del *ius cogens* internacional que han quedado plasmadas en esta resolución, en principio, no solo ante la obvia imposibilidad de que la víctima directa acuda ante el juez de distrito a denunciar su desaparición, sino también, porque con dicha apertura se permite que sea cualquier persona interesada en dar con el paradero de aquella quien comparezca ante la autoridad de amparo para activar los mecanismos de búsqueda.

En virtud de lo anterior, el parentesco de la compareciente ***** con la víctima directa de la desaparición, *****, es irrelevante para analizar la procedencia de esta acción, pues el propio artículo 15 de la ley de la materia, en congruencia con las disposiciones de derecho nacional e internacional, permiten que sea cualquier persona la que comparezca a denunciar la desaparición de una persona para emprender su búsqueda.

Esto es así, porque del informe rendido por la agente del Ministerio Público Federal titular de la entonces denominada Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, con residencia en la Ciudad de México (actualmente en transición), se desprende copia autenticada de las originales que obran dentro de la carpeta de investigación *****

Documento público que, aunque fue exhibido en copia autenticada, la autoridad ministerial que la expide es competente para tal expedirla en los términos que indica el numeral 71 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aunado a que no fue redargüida de falso por alguna de las partes durante el juicio.

Cabé agregar que también fue correcto que la jueza de distrito apoyara su decisión de reconocer la legitimación de ***** en lo dispuesto en

Históricamente, el juicio de amparo ha sido la construcción legal por excelencia para analizar y reparar violaciones a derechos humanos; sin embargo, la evolución del propio texto constitucional ante los nuevos paradigmas en la materia, condujeron al legislador a emitir por separado la reglamentación de los medios de reparación integral. Así nació la Ley General de Víctimas.

62



Dada su construcción, más allá de ser un ordenamiento declarativo, la Ley General de Víctimas es una auténtica herramienta para hacer efectivos sus derechos en todas y cada una de las esferas, públicas y privadas, en las que estén inmersos; además es de observancia general, por lo que su diseño multidimensional resulta aplicable transversalmente en todos los procedimientos en los que deba decidirse acerca de algún derecho tutelado en favor de las víctimas de derechos humanos, incluyendo desde luego el juicio de amparo.

Esta última característica no es menor, pues implica que la Ley General de Víctimas puede ser aplicada en simultáneo con los procedimientos que rige la Ley de Amparo, para complementarse.

Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado precedente en el sentido de que el carácter de víctima indirecta reconocido por el artículo 4º de la Ley General de Víctimas cobra operatividad en el juicio de amparo cuando se promueve en su vertiente de *hábeas corpus*.

En esa oportunidad, el Alto Tribunal recalcó la importancia de determinar adecuadamente la competencia territorial de los jueces de distrito para allanar el acceso al juicio de amparo a las víctimas indirectas de la desaparición forzada cuando comparecen a reclamarla como acto destacado, en aras de que éstas puedan participar de manera inmediata en el procedimiento, de tal modo que acceden de manera personal al expediente, obtener copias, ventilar su opinión, recibir información directa, aportar pruebas, formular alegatos y, en general, hacer valer sus derechos de manera eficaz.

Empero, lo relevante de ese asunto para el recurso que nos ocupa, radica en el reconocimiento expreso hacia las víctimas indirectas de la desaparición forzada como personas sujetas de derechos y aptitud de comparecer a ejercerlos de manera eficaz en el procedimiento de amparo, además, al tenor de lo dispuesto en la ya referida Ley General de Víctimas.

Adicionalmente, cabe agregar que esta legitimación que se le reconoce a María de la Luz Fuentes Caudillo no debe limitarse a la potestad de comparecer ante el órgano de amparo a activar los mecanismos de búsqueda, sino a ser reconocida como parte quejosa y material en la *litis* constitucional, por propio derecho.

Esto es así, porque la Corte Interamericana ha establecido que los familiares de las víctimas de

En la sentencia del Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, la Corte refirió que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, **deben contar con amplias oportunidades para participar y ser escuchados**, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una **justa compensación**.

Aunado a este aspecto sustantivo, las víctimas igualmente encuentran su espacio de participación en torno a su propio **derecho a conocer la verdad**.

En este mismo tema, el tribunal ha establecido que toda persona, incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones.

Además, tal como fue precisado en el CASO Radilla Pacheco Vs. México, toda vez que uno de los objetivos de la desaparición forzada es impedir el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes, cuando una persona ha sido sometida a secuestro, retención o cualquier forma de privación de la libertad con el objetivo de ocasionar su desaparición



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

forzada, si la víctima misma no puede acceder a los recursos disponibles, **resulta fundamental que los familiares u otras personas allegadas puedan acceder a procedimientos o recursos judiciales rápidos y eficaces** como medio para determinar su paradero o su estado de salud o para individualizar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva.

En ese sentido, si el amparo *hábeas corpus*, por su diseño conforme a los estándares universal e interamericano de los derechos humanos, implica el resarcimiento a derechos fundamentales como la integridad física y psicológica, así como a la verdad, es inconcuso que debe reconocer la legitimación activa, con toda amplitud, de las víctimas indirectas de la desaparición, siendo éstas preponderantemente los familiares de la persona desaparecida.

Resta decir que el estándar de comprobación de la afectación en dichas esferas sustantivas es cercano a la presunción.

Acerca de ello, el tribunal interamericano, en el Caso *Vereda La Esperanza Vs. Colombia*, consideró que, en casos que involucran la desaparición forzada de personas, es posible entender que la violación del derecho a la integridad de los familiares de las víctimas es una consecuencia directa de ese fenómeno, que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo que se acrecienta.

Además, indicó que estas afectaciones, comprendidas integralmente en la complejidad de la desaparición forzada, se proyectarán en el tiempo mientras subsista la falta de esclarecimiento del paradero final de la víctima desaparecida.

Por último, concluyó que se puede declarar la violación del derecho a la integridad de familiares de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción *iuris tantum* respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, y compañeros y compañeras permanentes, siempre que ello responda a las circunstancias particulares en el caso; de manera que, con relación a los familiares directos, corresponde al Estado desvirtuar dicha presunción.

Todo lo cual, pone en evidencia lo **infundado** que resulta el agravio que hace valer al respecto la autoridad responsable en torno a la falta de legitimación de *****

de amparo en favor de ***** para promover la demanda
y por propio derecho. *****

Así, el tópico expuesto ya ha sido definido por este tribunal, por lo que quedó firme y no es dable el estudio de nueva cuenta, puesto que un nuevo examen de ello, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica.

II. Violaciones procesales esgrimidas por las autoridades recurrentes.

Las autoridades militares recurrentes, **impugnan el procedimiento** llevado a cabo por la jueza de amparo al momento de recabar pruebas. Debiendo precisarse, que las violaciones procesales que ahora se hacen valer, constituyen una reiteración de las que se expresaron en el recurso de revisión 89/2019, del índice de este tribunal colegiado.

Sostiene la parte inconforme que la jueza de Amparo se tomó atribuciones que no le correspondían y que en todo caso eran propias del órgano ministerial de investigación de delito (**Agravio Dos**); que no estaba en posibilidad legal de recabar las copias de las carpetas de investigación, información de compañías telefónicas, del Servicio Médico Forense, etcétera, porque con ello buscó

partes para llevar a cabo las diligencias de prueba que desahogó (**Agravio siete**); que se transgredió el principio de igualdad en el procedimiento, porque la jueza recabó pruebas de manera unilateral en contravención al artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles y por tanto, devienen ilícitas y carentes de valor probatorio (**Agravio ocho**); y, que en todo caso se debió ordenar a la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República, que recabara los indicios que condujeran a clarificar el secuestro de la persona y su paradero, pero no fincar alguna responsabilidad en el juicio de amparo con base tan solo en juicios de valor (**Agravio nueve**).

Agravios de mérito que devienen **inoperantes** porque, como se anticipó, esas violaciones procesales las hizo valer en el citado recurso de revisión *********, del índice de este tribunal colegiado; tanto que fue ordenada la reposición del procedimiento al actualizarse precisamente una violación procesal de las que alegó -la relativa a que no se le dio posibilidad de probar-; ejecutoria de mérito, donde



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

los agravios que ahora se reiteran fueron desestimados, en los términos siguientes:

Como quedó precisado en las consideraciones previas de esta sentencia, la desaparición forzada de personas constituye una grave violación a derechos humanos que implica una transgresión intensa a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima.

En cuanto a la tutela de la libertad, el artículo 14, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ordena que nadie sea privado de la libertad sino mediante un juicio en que se sigan las formalidades del procedimiento.

Mientras que la vida y la integridad personal están garantizadas según su artículo 22, segundo párrafo , el cual proscribe actos como las penas de muerte, mutilación y el tormento de cualquier especie.

Asimismo, el artículo 29 constitucional, en su párrafo segundo, establece que no se restringirá ni suspenderá el ejercicio del derecho a la integridad personal, ni la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

Con lo anterior, queda claro que la prohibición de actos de desaparición forzada, al igual que otros coetáneos como la tortura, son derechos que no pueden suspenderse ni restringirse en ninguna situación y, por tanto, constituyen derechos absolutos.

En el marco de la Ley de Amparo vigente, las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, así como sus familiares tienen a su alcance, como mecanismo jurisdiccional, el derecho de acudir al juicio de amparo indirecto en términos de sus artículos 15, 17, 20, 35 y 107, fracción II.

Conforme a tales preceptos, los jueces de distrito son competentes para conocer de estos juicios de amparo indirecto conforme a esa regulación especial.

Esta forma de tramitación tiene características propias para dotarlo de celeridad y desprenderlo de formalidades que entorpezcan la intervención de la autoridad es que puedan impedir la perpetración de tales violaciones graves a derechos humanos. Se trata, pues, de un proceso sumario en el que se acortan los tiempos de substanciación en diversas formas, sobre la base de que la violación a los derechos humanos que se

combate es especialmente grave y requiere de intervención urgente.

Pese a la existencia de este marco facultativo, en el ámbito interno aún no existen criterios definitivos que detallen cuestiones fundamentales para la operatividad del juicio de amparo indirecto cuando se plante a la desaparición forzada como acto reclamado destacado.

No obstante, el Alto Tribunal sí ha realizado precisiones importantes, para lo cual también se ha guiado de las recomendaciones que los organismos internacionales han emitido en materia de desaparición forzada de personas.

En lo particular, ha indicado que la legislación de amparo rechaza cualquier exigencia gravosa acerca de la identificación del lugar de la detención o la determinación de la autoridad responsable.

También, ha señalado que por la propia naturaleza de la desaparición forzada, el juez que conozca de la demanda amparo, en ejercicio de sus funciones de investigación y en atención a los protocolos que decida aplicar, deberá recabar diversos medios probatorios o llevar a cabo actuaciones en lugares distintos al lugar de su residencia y que, inclusive, deberá informar a las autoridades administrativas competentes en relación a la desaparición del quejoso, como por ejemplo, a la Comisión Nacional de Búsqueda prevista en el artículo 50 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Con respecto al resto de las autoridades, la Suprema Corte ha precisado que subsiste el deber de auxilio a cargo de todos los órganos de gobierno para que el juez competente pueda allegarse de la información necesaria para determinar cuál es el paradero de la víctima del multicitado delito.

En ese mismo tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que, si bien en ciertas circunstancias puede resultar difícil la investigación de esos hechos, la obligación relativa a investigarlos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio, y no como una mera gestión de intereses particulares que dependa exclusivamente de la iniciativa de la víctima o de sus familiares.

De hecho, la iniciativa probatoria no está en manos tan solo de las víctimas, sino que es la autoridad quien debe buscar efectivamente la verdad y ese deber subsiste en tanto persista la incertidumbre sobre el paradero o suerte final de la persona desaparecida.



A sí las cosas, a efecto de salvaguardar los derechos de las víctimas, tanto directas como indirectas, en los casos de desaparición forzada, todas las autoridades están vinculadas a colaborar de manera pronta y expedita con el juez ante quien se haya radicado el juicio de amparo indirecto, utilizando todos medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones e investigaciones que se requieran para esclarecer la suerte de las víctimas, prevaleciéndose para ello de medios de comunicación tradicionales o electrónicos oficiales e, inclusive, a través del apercibimiento judicial respectivo, para lograr, en su caso, la comparecencia del quejoso ante la autoridad judicial, pues el juicio de amparo accionado conforme a esta variante, constituye un auténtico hábeas corpus.

Corolario de lo anterior, se clarifica lo infundado de los planteamientos de la autoridad recurrente en el sentido de que la jueza federal se tomó atribuciones que no le correspondían, sino que eran propias del órgano ministerial de investigación de delito.

También, que carecía de facultades legales para recabar las copias de las carpetas de investigación, información de compañías de teléfonos, Servicio Médico Forense, etcétera, porque con ello buscó acreditar hechos y no violaciones a derechos fundamentales.

Y no se comparte esa postura, porque en virtud de las razones de derecho que han quedado precisadas, la jueza de distrito no solo tenía esa potestad a su alcance, sino que, de conformidad con las obligaciones que dimanaban del artículo 1° de la Constitución Federal en cuanto a la protección de los derechos humanos y el marco facultativo previsto en el artículo 15 de La Ley de Amparo, tenía a su cargo el deber de realizar la búsqueda inmediata y exhaustiva del quejoso *****

***** , a través de todas y cada una de las actuaciones que tuviera a su alcance para dar con su paradero.

Además, porque cabe recordar que los mecanismos de búsqueda no se activan tan solo en virtud del interés de las partes, sino como un auténtico deber del Estado para evitar la perpetración de la violación o su agravamiento.

En ese tenor, fue correcto que la juzgadora se allegara de las carpetas de investigación, información proporcionada por compañías privadas de telefonía e incluso del Servicio Médico Forense, pues tales probanzas son acordes con el impulso de búsqueda de la persona desaparecida, con presunción de vida e incluso para el caso de su fallecimiento.

Postura que este tribunal colegiado no comparte, pues de tales documentos que contienen interpretaciones valiosas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de los alcances que los recursos hábeas corpus deben tener en los países de la región, es que se arriba precisamente a la conclusión contraria,

Sigue argumentando que se trasgredió el principio de igualdad en el procedimiento porque la juzgadora recabó pruebas de manera unilateral, en contravención a lo que indica el artículo 80 del Código Federal de



Por último, que durante el procedimiento la jueza igualmente desatendió el contenido del artículo 65 (sic) del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque no citó a las partes para llevar a cabo las diligencias de prueba que desahogó.

Para dar respuesta a los anteriores planteamientos, será necesario abundar con respecto a algunas de las características procesales del amparo hábeas corpus.

Tomando como base la Ley de Amparo y los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han sido comentados en esta ejecutoria, este tribunal colegiado arriba a la conclusión de que, para el desahogo de las diligencias de investigación que emprenda el juez de distrito, no se requiere mayor formalidad, como pueden serlo las que se enuncian en el artículo 119 de la Ley de Amparo.

Pues dicho apartado se refiere al desahogo de pruebas propuestas por las partes bajo el esquema procesal del amparo convencional, sin embargo, esto no aplica cuando el juicio de amparo se promueve en su vertiente de hábeas corpus.

Esto es así, porque las pruebas que se desahogan dentro de ese procedimiento se recaban ex officio por el juez, y con propósitos y bajo principios distintos a los que rigen en un amparo como mecanismo de control de constitucionalidad del área residual de derechos fundamentales.

Y aunque es cierto que, al activar el procedimiento de búsqueda de la persona desaparecida el juzgador despliega su actuar bajo un esquema preponderantemente unilateral, esto es, sin dar mayor participación a las partes ni permitir de momento la contradicción de las pruebas al momento de su desahogo, ello encuentra justificación en los principios de celeridad, eficacia y prevención de agravamiento de la violación que rigen este procedimiento especial, aunado a que es innecesario recabar el consentimiento de las partes para llevar a cabo las diligencias pertinentes para la búsqueda de la persona.

Por el contrario, de obligar a los jueces de distrito a mandar llamar a las partes inexcusablemente a todas y cada una de las diligencias de búsqueda efectuadas para dar con el paradero de la persona desaparecida, incluso, de someter la validez de tales actuaciones a la notificación, asistencia y contradicción de las diligencias por parte de todas y cada una de las autoridades llamadas como responsables, acarrearía el

Además, la información que se recabe servirá, tan solo en un primer momento para establecer si existen o no de indicios razonables acerca del hecho y, solo en caso de ser así, revertir la carga probatoria a la autoridad, quien, ahora sí, deberá contar con la oportunidad debida durante el procedimiento para ser oído en su defensa.

Más al respecto, en la sentencia del Caso de la Masacre de Mapiripán Vs. Colombia, la Corte Interamericana refirió que las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación.

Entonces, en aras de construir un esquema afín a las características y principios del amparo instaurado como mecanismo hábeas corpus, será menester que, tanto al ir valorando paulatina y en forma presta los resultados de las acciones de búsqueda, como al establecer la probable existencia o no de una violación a derechos fundamentales a cargo de una autoridad del estado, las pruebas podrán ser apreciadas al tenor del artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, el cual establece: (Se transcribe).

78



información que resulte de las diligencias de carácter excepcional que se llevan a cabo de manera expedita para indagar el paradero de la víctima, como son las comparecencias ante el órgano jurisdiccional de familiares y conocidos en torno a la desaparición, inspecciones judiciales y actuariales de carácter urgente y copias cotejadas de las actuaciones desahogadas por diversa autoridad.

Y en cuanto al alcance probatorio de dichas probanzas, éste debe quedar necesariamente al prudente arbitrio del juzgador quien debe valorarlas indiciariamente y, además, reconocer que tales hechos controvertidos podrían fortalecerse o desvanecerse, según sea el caso, en presencia de otros indicios o medios probatorios, como pueden ser, por ejemplo, los que aporten las autoridades responsables al ampliar su informe con justificación en ejercicio de su derecho de defensa.

Sin perjuicio de que, en la siguiente consideración, este órgano colegiado desarrolle con mayor amplitud el derecho de las partes del juicio de amparo señaladas como posibles perpetradoras del acto de la desaparición forzada, a comparecer a aportar una explicación razonable con respecto a los hechos que se le imputan cuando existen indicios positivamente hacia su ejecución.

Que apunten Siguiendo con esta línea argumentativa, la Corte Interamericana en la sentencia emitida en el CASO Blake Vs Guatemala , validó la posibilidad de que la desaparición de un individuo sea demostrada mediante pruebas testimoniales indirectas y circunstanciales, sumadas a inferencias lógicas pertinentes, así como su vinculación a una práctica general de desapariciones.

En ese precedente, dicho tribunal entendió que las pruebas documentales y testimoniales directas no son las únicas que pueden fundamentar la sentencia, pues las pruebas circunstanciales, los indicios y presunción es pueden igualmente utilizarse, siempre que de ellos se puedan inferir conclusión es consistentes sobre los hechos.

Además, la propia Corte Interamericana en su sentencia relativa al Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, ya ha advertido que la prueba indiciaria o presuntiva resulta de especial importancia cuando se trata de denuncias sobre la desaparición, ya que esa forma de represión se caracteriza por procurar el ocultamiento de cualquier prueba que apunte hacia la comprobación del secuestro y destino de la persona desaparecida.

Pues lo cierto es que ésta no contiene una regulación específica para los procedimientos de búsqueda e indagación previstos en su artículo 15 y, sobre todo, que resulten acordes con su espíritu y los actos de autoridad



tampoco una acción u omisión en perjuicio del directo quejoso (**Agravio 1**).

Es así, porque parte de una premisa incorrecta dado que si bien en la sentencia recurrida se estableció que existen indicios razonables que conducen a determinar que elementos del Ejército Mexicano detuvieron al quejoso; lo cierto es que en ningún momento se atribuyó acto u omisión específica a algún elemento de dicho Ejército de manera individualizada. De ahí, que en la sentencia recurrida no se estableció que las personas recurrentes o las diversas que ocupaban el cargo que las primeras ostentan, al momento de la violación de derechos fundamentales, hubieran realizado determinada acción u omisión en perjuicio del solicitante de amparo.

Por otra parte, los inconformes refieren que indebidamente se sostiene que las pruebas que desahogó unilateralmente la jueza de Amparo cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo establecido en el artículo 79 de la Ley de Amparo (**Agravio once**).



Lo cual constituye un indicio de que la variación en las distinciones apuntadas en las declaraciones del testigo podrían obedecer a la intimidación u hostigamiento que produce la situación de que elementos del ejército hayan

Es así, porque como se tiene visto, las pruebas fundamentales para tener por acreditada la detención del quejoso por parte de elementos del Ejército, lo constituyen los testimonios de ***** y dijo que estas se vieron corroboradas con las manifestaciones de los testigos uno y dos, así como con las diversas declaraciones que emitió ***** y ****
***** o *****
***** o ***** y si bien también se alude a la inspección judicial, ese dato se agregó como un indicio más, dato o indicio que a consideración de este tribunal resulta irrelevante para acreditar la detención en las circunstancias establecidas. De ahí que, aunque carezca de valor probatorio, lo cierto es que no trascendería y en nada beneficiaría a la parte recurrente.



Además, sostiene la parte recurrente que indebidamente se sostuvo que las diversas declaraciones que tomó el Ejército, contravienen los artículos 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, así como lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el *Caso Rosendo Radilla Pacheco vs. México*, porque no se estableció el motivo de dichas diligencias (**Agravio catorce**).

Este motivo de disenso es **infundado**, porque sí le dio razones para estimar el porque contravenía dichos preceptos, fue precisamente porque se trata de hechos en los que se involucra la detención, desaparición y privación de la vida de un civil. Y de esos hechos corresponde investigar a la justicia común.

Consideraciones que evidentemente no se encuentran controvertidas por las recurrentes, porque nada dicen del por qué o cómo es que el solo hecho de que intervenga un civil no es razón suficiente para que la autoridad militar no investigue. Lo cual debió exponer para

sibilidad (C
 distrito. F
 eficiencia (C
 a la pa
 tir una s
 un eleme
 medidas
 o quince
 ravio resu
 o en la eje
 multirrefe
 s fundam
 vinculó a
 ncreditarso
 or al precis
 os, los efe
 las circuns
 esos hech
 acionadas

sibilidad (C
 distrito. F
 eficiencia (C
 a la pa
 tir una s
 un eleme
 medidas
 o quince
 ravio resu
 o en la eje
 multirrefe
 s fundam
 vinculó a
 acreditar
 or al precis
 sos, los ef
 las circuns
 esos hech
 acionadas

sibilidad (C
 distrito. F
 eficiencia (C
 a la pa
 tir una s
 un eleme
 medidas
 o quince
 ravio resu
 o en la eje
 multirrefe
 s fundam
 vinculó a
 acreditar
 or al precis
 sos, los ef
 las circuns
 esos hech
 acionadas

sibilidad (C
 distrito. F
 eficiencia (C
 a la pa
 tir una s
 un eleme
 medidas
 o quince
 ravio resu
 en la eje
 multirrefe
 s fundam
 vinculó a
 acreditar
 or al precis
 os, los ef
 las circuns
 esos hech
 acionadas

sibilidad (C
 distrito. F
 eficiencia (C
 a la pa
 tir una s
 un eleme
 medidas
 o quince
 ravio resu
 en la eje
 multirrefe
 s fundam
 vinculó a
 acreditar
 or al precis
 sos, los ef
 las circuns
 esos hech
 acionadas



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Además, los efectos deberán ser precisados por la autoridad de amparo dependiendo de las circunstancias concretas en que los considere probados, hecho énfasis en lo que la Suprema Corte estableció, en cuanto a que el órgano de amparo podrá determinar, en su caso, las medidas reparatorias relacionadas con ello.

IV. Contestación del agravio que hace valer la —directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de México.

Finalmente, en cuanto al agravio hecho valer por la directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de México, donde sostiene que indebidamente se le vincula directamente al pago de la compensación subsidiaria, porque se pierde de vista que, de acuerdo a los artículos 1 y 20 constitucionales, 2, 6, 26, 64 a 72 de la Ley General de Víctimas, para el caso de violaciones a derechos humanos la que corresponde aplicar es la reparación integral del daño; aunado a que el presupuesto necesario para solicitar la compensación subsidiaria por la comisión de un delito, es la imposibilidad fáctica del responsable directo de reparar el

Es **fundado y suficiente**, pero únicamente **para**
precisar los efectos de la protección constitucional
otorgada.

Numeral de mérito en el que se lee:

“Artículo 68. La Federación y las entidades federativas compensarán a través de las Comisiones en el ámbito de su competencia, de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, daño o menoscabo al libre desarrollo de su personalidad o si la víctima directa hubiera fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física o mental como consecuencia del delito, cuando así lo determine la autoridad judicial.

La Comisión Ejecutiva podrá cubrir la compensación subsidiaria para asegurar su cumplimiento, con cargo a los recursos autorizados para tal fin, cuando la Comisión de víctimas de la entidad federativa lo solicite por escrito en términos de lo previsto en la fracción XVII del artículo 81 de la Ley.”



Luego entonces, no se le desvincula, pero sí se establece que efectivamente quien debe asumir la reparación es la directamente responsable, y únicamente para el caso de que no se lleve a cabo esa reparación quedará vinculada, pero de manera subsidiaria.

Por lo que, los efectos del fallo protector se modifican, en la parte que a continuación se indica, de la forma siguiente:

6) Medida de satisfacción.

A través del órgano competente, **únicamente para el caso de que la autoridad directamente responsable se encuentre imposibilitada, de manera subsidiaria,** la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debe iniciar un procedimiento a fin de que se pague una compensación en forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo, a favor de *****

*****, por conducto de su madre
***** ** * **** ***** o de cualquier
persona que acredite su representación;
además, debe iniciar un procedimiento para que
se pague la compensación a ***** ** *

En la inteligencia de que el caso concreto es **desaparición forzada**, por lo cual las resoluciones que se dicten deben ser proporcionales a la gravedad del daño sufrido. Si bien el artículo 147 de la Ley General de Víctimas dispone que a la solicitud de ayuda o apoyo debe agregarse un estudio de trabajo social, dictamen médico y dictamen psicológico, no debe perderse de vista que **** *

En consecuencia, ante lo **infundado** e **inoperante** de los agravios de las revisionistas, y al no actualizarse ninguna hipótesis de suplencia de la queja deficiente, y ante lo **fundado** y **suficiente**, pero únicamente para precisar los efectos de la protección constitucional; lo conducente es confirmar la sentencia sujeta a revisión, emitida en el amparo indirecto *********, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, promovido por



Amparo en revisión 35/2024

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **ampara y protege a** ***** y ***** **

**** *** ***** *******, contra los actos y autoridades precisados en el resultado primero de esta sentencia, en los términos precisados en la sentencia recurrida.

Notifíquese; en la forma que se encuentra ordenada en autos; envíese testimonio de esta resolución junto con los autos; háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, por unanimidad de votos de la Magistrada Presidenta Luz Elba de la Torre Orozco, Magistrados Francisco Javier Araujo Aguilar y Roberto Hoyos Aponte; fungió como ponente el segundo de los nombrados. Conforme lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley de Amparo, así como en términos de lo establecido en los artículos 2, fracciones XXXIII, LXIX, LXX, LXXI, 980 y 981, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en

de la pr
aciones q
colegiado
veinticuatre
as de la
retario de a
Aguilar Ron
Acuerdos.

de la pr
aciones q
colegiado
veinticuatro
as de la
retario de a
Aguilar Ron
Acuerdos.

de la pr
aciones q
colegiado
veinticuatro
as de la
retario de a
Aguilar Ron
Acuerdos.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:

94451866_0786000034561335005.p7m

Autoridad Certificadora:

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante(s): 4

FIRMANTE				
Nombre:	Christian Gabriel Aguilar Romero	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.ff	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	27/11/24 17:00:03 - 27/11/24 11:00:03	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	52 cd 31 32 da af d4 88 f4 04 65 5b f3 d0 31 80 34 a2 1b 30 b4 f2 9e 19 39 7b 2c 35 26 4b 29 8c 68 c2 b0 6d 65 c4 35 da c3 e8 e0 6b 3e 19 73 37 eb 3f ad d0 bf 43 24 58 cc 57 14 cc a4 65 40 7b 84 30 9d 35 d3 dc 7c 36 e5 23 cd 1b 02 05 99 d5 99 b1 1f 42 1c 77 c0 2f de 6f 84 ce ec 73 31 cd f0 1b c6 cf 4f cb 7a 18 7b 22 13 9e 51 97 7a 72 67 45 e4 78 9b 66 41 ff 01 a9 4e a9 95 43 8b 37 77 0e 82 b2 c0 e1 3f 17 81 6d d8 d6 7c 08 b0 4f 98 50 05 12 20 3f b7 38 c0 1e 24 97 02 1e 61 01 99 a5 84 3c 99 ac 3a 1f d5 2d 89 6a dd 3b b8 fb 9a fc 93 c4 5d ce 64 c2 ce 72 d4 16 42 bd 90 c8 ab b7 8b 79 51 67 44 d4 23 4c c7 2a db 2d cc 18 48 32 18 74 e0 c0 d2 0a d4 17 12 35 31 8c af 26 e8 61 ac 22 5e b2 3c 02 c6 cb de b3 70 26 1b 39 c7 1a db ad ad f0 13 bb a7 ab d4 01 12 c1 1b 6d			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	27/11/24 17:00:04 - 27/11/24 11:00:04			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.ff			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	27/11/24 17:00:04 - 27/11/24 11:00:04			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	192709554			
Datos estampillados:	CLkyVBkQsc181x0qwHQ4m7fbYOY=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	FRANCISCO JAVIER ARAUJO AGUILAR		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.60		Revocacion:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	27/11/24 18:23:45 - 27/11/24 12:23:45		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	4c 20 d2 6d 8c 50 15 74 d3 5f 19 4f 4a 24 25 37 48 95 e8 82 dc 23 83 2c a7 c8 9b 08 e2 36 94 03 50 65 23 60 55 98 ce c4 92 00 82 92 af 10 78 1d 25 39 04 14 1e 02 0f a6 24 09 60 fc ed 91 95 ae 40 1b bb f3 3e c8 d7 0a 3b 44 de a6 c1 1f fc 60 2e 56 3a 6c 3c f7 28 69 1b d3 a1 7f 3a 53 57 ed 3f f2 bd f2 e8 3d e9 28 16 c9 5b 73 24 a5 c5 48 ac 54 ca 6a dc 1b 6a cb db 20 6d 0f 76 04 1e af 60 9f e6 18 d6 01 db b2 c3 2d b2 6b 47 79 b8 b3 95 b1 2f 97 d9 06 2b 62 cc 65 1a 01 6c 78 d7 bc 9a 58 0f bb 3e 0a ba 7a c5 c5 84 24 f8 4d 04 cb b8 56 d3 d9 2a a7 96 25 07 91 08 3e 99 fa fc 51 bf 14 29 a0 00 df c7 14 a3 ff 17 26 0d 9d cf eb 6d bd c3 9e 8d 12 ee 41 b3 23 14 03 fd 6b 9f 3c 66 97 31 3e f2 10 86 a4 30 0e 3c 7c 82 02 32 63 dd b6 03 c4 5a 33 b7 8b 0e ed e2 4e 22 e1 3a 98			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	27/11/24 18:23:46 - 27/11/24 12:23:46			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.ca.60			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	27/11/24 18:23:46 - 27/11/24 12:23:46			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	192791202			
Datos estampillados:	f+wUTeOD8HcavKDeaQK/xXbmMcM=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Luz Elba de la Torre Orozco	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.0b.50	Revocacion:	Bien	No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	27/11/24 18:29:19 - 27/11/24 12:29:19	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	16 3c d1 98 52 0f 12 83 b3 61 54 37 e1 3a 9a 5d b5 b8 d6 42 68 b5 48 36 2e 5c 52 ab b0 b3 38 2e 22 2b 4a f7 3d 0b 72 84 a2 ee e0 1d f8 12 bf 5b a3 d9 14 04 c7 90 95 72 9b 75 4f i3 ac 82 42 f5 59 f6 e2 c0 44 c1 ba dd 2f c9 5a 7d 30 e8 d1 ad 0f d7 4b 2a 42 69 95 c6 a5 85 25 3b e8 3d 74 0e 93 11 9e ba d8 86 f5 31 c6 54 68 d4 6c c3 af 01 6b cb 74 86 bf e4 2b 5d 84 5f 81 df 0c 02 74 bc 1c f3 64 44 48 d1 63 85 44 37 7f 08 c6 a7 e0 0c f5 0c b5 94 79 73 b5 31 35 ed fc ad ae 3c 7c 2f c1 a6 6a f7 1d af be b7 24 f5 2a 8c fe 4c 2e 3d f6 48 7c 6a a9 a2 ef e5 d3 99 03 bb 93 fe 36 0c b2 44 05 d8 47 c9 c3 78 5c 94 d9 6f 88 be 51 94 9a ff 0e ce f4 24 3b d3 48 40 18 c1 90 90 7e 43 b5 70 fd 1a e1 7a a6 1b f7 58 45 7c 6a fe 22 2a 62 2a 63 52 59 04 74 ed ca d2 16 6b 77 61 75 40			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	27/11/24 18:29:19 - 27/11/24 12:29:19			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.0b.50			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	27/11/24 18:29:19 - 27/11/24 12:29:19			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	192797660			
Datos estampillados:	5/v+Ai97IC6a3Eic6j0biINdEo=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	ROBERTO HOYOS APONTE		Validez:	BIEN Vigente
FIRMA				
No Serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.37		Revocacion:	Bien No revocado
Fecha (UTC/ CMDX)	27/11/24 18:30:17 - 27/11/24 12:30:17		Status:	Bien Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	7e ef 3e 69 68 a8 8c 34 4f i5 93 9e 22 a9 ca 81 cd 3f 77 8c c0 52 20 7b 39 cf c3 7f 16 10 80 b3 db 25 5f fb 78 85 76 07 29 e4 b6 22 fb 65 a8 96 85 d9 4a a3 39 1e 45 fe d4 5f dd 50 30 60 d0 1b 0e 00 b5 eb 72 cc 63 f2 44 b0 dd 07 a1 05 7a b9 78 02 ef 9c 3f f8 69 23 ee a8 d3 76 17 e9 0a 2f 2c 1a 0a 61 9c 9a 44 aa 24 60 99 6c 33 e0 79 56 3d 7c b1 c4 75 36 e2 96 d5 ef b3 9d ec 53 26 39 ed 03 ac 3b e5 41 26 e9 0f 99 a2 00 45 fe 73 ac 1a 16 3f c3 12 e1 8a f0 23 fe 03 29 bb fa 44 ac 0c 0d 01 a8 d0 65 0f 96 21 55 8e 83 a8 04 45 da 93 88 70 5f d0 23 38 da c3 b3 51 2f f3 b7 3e a2 45 da 79 cb 86 3e 44 66 14 09 e9 44 ad 93 a5 da d8 ac bf ee d5 ca 06 36 24 1f dc c1 57 60 f2 c2 e9 c5 fa 8f 25 57 84 fb c4 a0 bc 2a ad 08 8f 37 7a b4 c1 80 cf a8 6e fb 65 7d 83 20 db 5f 36			
OCSP				
Fecha: (UTC/ CMDX)	27/11/24 18:30:17 - 27/11/24 12:30:17			
Nombre del respondedor:	Servicio OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Numero de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.e4.37			
TSP				
Fecha : (UTC/ CMDX)	27/11/24 18:30:18 - 27/11/24 12:30:18			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	192798606			
Datos estampillados:	VkJ6owXQACUe1q16vfKpmmy7QK4=			

El veintiseis de noviembre de dos mil veinticuatro, la licenciada Esther Romero Garcia, Secretario(a), con adscripción en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 108 y 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como CONFIDENCIAL, por tratarse de DATOS PERSONALES CONCERNIENTES A UNA PERSONA FÍSICA IDENTIFICADA O IDENTIFICABLE.. Conste.